

La consulta plantea la conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, de la cesión de datos de localización de las consultas de sus colegiados mediante la incorporación de los mismos a un mapa web como información a los usuarios, por una parte, y por otra, la posibilidad de comunicar los importes salariales de los empleados del Colegio consultante a sus colegiados.

I

La pretensión del consultante de elaborar un mapa para publicarlo en Internet con los datos de dirección, municipio, código postal y teléfono de sus colegiados constituiría una cesión de datos personales definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”, que requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado, según dispone su artículo 6.1 y 2 y sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con previo consentimiento del interesado, excepto cuando se trate de datos recogidos de fuentes de acceso público, a tenor del artículo 11. 1 y 2 b) de la misma norma.

El consultante manifiesta en su escrito que los datos referidos figuran publicados en una fuente de acceso público entendiendo que se está refiriendo al listado de colegiados publicado.

En primer lugar es preciso indicar que la definición contenida en el artículo 3 j) relativa a las fuentes accesibles al público se complementa con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 que tiene por finalidad clarificar el concepto de fuentes accesibles al público.

El artículo 3 f) de la Ley Orgánica define las fuentes accesibles al público en los siguientes términos: “Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la



consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación”.

Esta Agencia viene considerando que el concepto transcrito debe ser entendido como exigencia de un doble requisito: por una parte, sólo será fuentes accesibles al público las que menciona el precepto; por otra, será además preciso que la consulta a dichos ficheros pueda ser realizada por cualquier persona, mediando o no el abono de un precio para ello.

Por tanto, para poder considerar el listado de colegiados como fuente accesible al público se exige la concurrencia de determinados requisitos que se contemplan en el artículo 7.1 c) del Real Decreto 1720/2007 1 “(..)c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional.”

En consecuencia, no todos los ficheros que contengan los datos enumerados taxativamente en el artículo han de ser considerados fuentes accesibles al público, sino que para que dicha circunstancia pueda tener lugar, será indispensable que tales ficheros puedan ser libremente accesibles por cualquier persona, bien gratuitamente, bien mediante el abono de una contraprestación. Los ficheros que conteniendo los datos enumerados sean utilizados internamente por el Colegio Profesional o sean de acceso restringido, por ejemplo, a los propios colegiados, exclusivamente, no tendrán la condición de fuente accesible al público.

En este sentido, debe indicarse que la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2001 recuerda que “Las fuentes accesibles al público son aquéllas a través de las cuales podemos conocer en bloque, es decir, no mediante consultas puntuales al Colegio Profesional correspondiente a cada colegiado, sino en su totalidad, en forma de listado, los pertenecientes a un determinado colectivo (...) por ser dicho conocimiento, íntegro, de carácter público”.

De este modo, será preciso que exista una divulgación previa del listado de colegiados, de forma que los mismos aparezcan en una publicación divulgada fuera del Colegio, aunque el número de sus destinatarios sea

limitado, no cumpliéndose este requisito en caso de que no exista divulgación externa al Colegio, sino que el censo sea de uso interno o estrictamente limitado a los colegiados.

La existencia de dicha divulgación previa se plasma en el apartado segundo del artículo 7 2. señalando que “En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.”

En consecuencia, el listado previsto en la consulta sólo tendrá la consideración de fuentes accesibles al público cuando concurren las dos circunstancias señaladas;

- Que los datos objeto de cesión se redujeran a aquellos enumerados en el artículo 7.1 c).
- Que los mismos hubieran sido objeto de difusión pública mediante la publicación de un directorio de colegiados.

Por tanto si el listado cumple dichos requisitos podrá tener la consideración de fuentes accesibles al público, con las consiguientes posibilidades de tratar y ceder los datos sin el consentimiento de los afectados, según lo señalado en el artículo 6.2 y 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

En consecuencia, la publicación en la página web de un mapa con el listado de situación de las consultas de los colegiados, convierte a la lista en fuentes accesibles al público, siempre que previamente se hayan dado los requisitos anteriormente señalados para considerarla como fuente accesible al público, y además se hayan cumplido con los deberes que con carácter general impone la normativa de protección de datos tales como, el deber de informar previsto en el artículo 5, o se haya obtenido el consentimiento de los sujetos, en los casos que proceda.

II

Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de la Corporación consultante, es preciso además tomar en consideración lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

El artículo 1 de la citada Ley señala como uno de los objetivos de la Ley establecer “los registros de profesionales que permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud”.

A tal efecto, el artículo 5.2 dispone que “Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado anterior, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos



generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de esta ley, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias. Los indicados registros, respetando los principios de confidencialidad de los datos personales contenidos en la normativa de aplicación, deberán permitir conocer el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y los otros datos que en esta ley se determinan como públicos”.

De este modo, teniendo en cuenta el hecho de que la Ley 44/2003 impone a la corporación consultante la obligación de creación y publicidad del Registro previsto en su artículo 5.2, cuyos datos serán, precisamente, los que la Ley Orgánica 15/1999 establece como públicos, cabe concluir que existirá, en todo caso una listado que reunirá los requisitos exigidos por el artículo 3 f) de la Ley Orgánica, por lo que su cesión, en cuanto a los datos que lo conformen, estará amparada por el artículo 11.2 b) de la propia Ley.

III

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 cuando exista una norma con rango de Ley habilitante de la cesión. (párrafo a) o “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros” (apartado c).

El artículo 5 i) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales dispone que “corresponde a los Colegios Profesionales el ejercicio de las siguientes funciones, en su ámbito territorial (...) ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial”.

Por otra parte, según el primer inciso del artículo 3.2 “es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente”.



El artículo 6.1 dispone que “los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de que se trate, se rigen por sus estatutos y por los reglamentos de régimen interior”, añadiendo el artículo 6.2 que “los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma profesión, y oídos éstos, unos estatutos generales, que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio competente. En la misma forma, se elaborarán y aprobarán los estatutos en los Colegios de ámbito nacional”.

Del tenor de los preceptos citados se desprende que existiendo la obligación del profesional de adscripción al Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de la profesión colegiada y quedando la actividad colegial y la relación del colegiado sometida a lo dispuesto en los estatutos, la adscripción del colegiado implicaría la aceptación de una relación jurídica sometida al régimen estatutario que aquél debe respetar. De este modo, las cesiones establecidas en los Estatutos, con independencia de la aprobación de los mismos a través de Real Decreto, resultaría amparada por lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

Del mismo modo, la Ley 10/1990 de 23 de mayo, de Colegios Profesionales de Canarias señala en su artículo 19 que “Para el ejercicio de sus fines, los Colegios Profesionales ejercerán las competencias que les vienen atribuidas por la legislación básica del Estado y, en todo caso, las siguientes: e) Aprobar sus Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior; g) Aprobar sus presupuestos.”. A su vez, el artículo 20.2 señala que “Los Estatutos de los Colegios contendrán, además de las determinaciones exigibles por la legislación básica del Estado, las siguientes: b) Derechos y deberes de los Colegiados; f) Competencias y régimen de funcionamiento de sus órganos de gobierno.” Por otra parte, su artículo 9.1 dice que “Constituido por Ley del Parlamento Autónomo un Colegio, sólo se podrá ejercer la profesión respectiva en su ámbito territorial, mediante la previa incorporación al mismo.”

Los Estatutos del Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife establecen en su artículo 41 que “La Junta General de Colegiados constituye el órgano supremo de la representación colegial, y a la misma deberá dar cuenta de su actuación la Junta de Gobierno que podrá ser ordinaria o extraordinaria.”; su artículo 47 señala que “Son funciones de la Junta General Ordinaria las siguientes: a) Exámen y aprobación, si procede, de los presupuestos del Colegio, así como de los estados de cuentas, gastos e ingresos.” También señala en su artículo 43 que “Los colegiados tendrán derecho a consultar, en la secretaría del Colegio, y durante las horas de oficina, los libros y antecedentes de los asuntos a tratar en las Juntas Generales, entre el período de la convocatoria y 48 horas antes de la reunión de la Junta. Las informaciones y consultas se efectuarán por riguroso orden de solicitud, que deberá formularse por escrito, especificando la cuestión consultada.”

En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el apartado 2 del mencionado artículo 4 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

La conclusión de cuanto antecede es la de que los datos de las retribuciones de los empleados del Colegio Profesional, el acceso y conocimiento de los mismos, sólo podrán utilizarse por los colegiados con la finalidad específica de conocer la documentación necesaria para la asistencia a la Junta General de Colegiados, que deberá celebrarse una vez al año y aprobar o no la partida de gastos de personal que figure en los presupuestos, y no para ninguna otra.

La relación estatutaria que se entabla entre el Colegio Profesional respectivo y sus colegiados cuando ingresan en el mismo, comporta que éstos tendrán el derecho a participar en la Junta General Ordinaria anual y emitir su voto respecto a los presupuestos (gastos previsibles) cuya aprobación compete a la misma, para lo cual, los colegiados podrán acceder, en la forma antes señalada, a la documentación relativa a los gastos de personal entre otros.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,